



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1313/2015-S2
Sucre, 16 de diciembre de 2015

SALA SEGUNDA

Magistrada Relatora: Dra. Mirtha Camacho Quiroga
Acción de amparo constitucional

Expediente: 11838-2015-24-AAC
Departamento: Tarija

En revisión la Resolución 06/2015 de 21 de julio, cursante de fs. 343 vta. a 354, pronunciada dentro de la **acción de amparo constitucional** interpuesta por **Román Gómez López, Presidente** representado legalmente por **Marco Antonio Cardozo Jemio** contra **María René Barrios Vargas, Guimer Beizaga Solares, Juan Antonio García Cardozo y José Guerrero Toribio**, todos Asambleístas Regionales del Chaco del departamento de Tarija.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 16 de julio de 2015, cursante de fs. 74 a 84 vta., el accionante mediante su representante, aseveró lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El 2 de junio de 2015, se llevó a cabo la primera sesión preparatoria de transición de directiva, con la presencia de ocho Asambleístas Regionales, donde se procedió a la elección del Comité Ad Hoc, conformado por Mario Jonatan Aldana, presidente y Juan Antonio García Cardozo, Secretario; en el que se determinó un cuarto intermedio hasta el 3 del igual mes y año, con la finalidad de que la Directiva Ad Hoc, proceda a verificar credenciales y emita el informe respectivo. Instalada la sesión, la mencionada Directiva, presentó informe sobre las credenciales de los ocho Asambleístas Regionales, señalando puntualmente la no existencia de observaciones de todos los documentos recibidos y revisados; sin embargo, los Asambleístas hoy demandados, incitados por el abucheo y silbidos de terceras personas que se hicieron presente en el hemicycle, se opusieron a que su similar, Roxana Vanesa Ferreira Carema, representante del Pueblo Indígena Originario Campesino (PIOC) Tapiete, sea habilitada en lugar del titular y participe de la

misma; a pesar que el nombrado presidente, efectuó pedido a los asambleístas y personas extrañas de guardar respeto y compostura, continuaron las agresiones y amenazas, por lo que dicha autoridad, aplicó el art. 21 inc. b) Del Reglamento de Funcionamiento y Debate de la Asamblea Regional del Chaco, que dispone realizar la consulta ante el Tribunal Departamental Electoral (TDE) y al Ministerio de Autonomías, respecto a la participación de la indicada representante del PIOC Tapiete, hecho por el cual se suspendió y dio por concluida la misma; empero, transcurridos unos minutos, de manera temeraria los cuatro Asambleístas demandados, retornaron al hemiciclo y bajo el argumento que continuaba la sesión, instalaron una pseudo sesión y procedieron a elegir una ilegal directiva, conformado por María Renee Barrios Vargas, Presidente; José Guerrero Toribio, Vicepresidente y Guimer Beizaga Solares, Secretario, y posteriormente procedieron a realizar el trámite de habilitación de firmas ante el Banco Unión S.A. con la intención de disponer arbitrariamente de Fondos del Estado Boliviano y dañar el patrimonio de la Asamblea Regional del Chaco Tarijeño.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

El accionante mediante su representante alega la vulneración del derecho a la soberanía, al ejercicio de la autonomía, a la función pública y a ejercer la facultad administrativa, citando al efecto los arts. 7, 21, 144 y 281 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela demandada, disponiéndose la nulidad del acto realizado por los Asambleístas Regionales demandados, desde la ilegal instalación de la pseudo sesión, conformación de la Directiva y elección del Presidente, así como la habilitación de firmas en el Banco Unión S.A. y se le restituya al cargo del Presidente la Directiva Regional del Chaco, oficiando al mencionado Banco para el inmediato cumplimiento de la sentencia.

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

Efectuada la audiencia pública el 21 de julio de 2015, según consta en el acta cursante de fs. 339 a 343 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

El accionante a través de su apoderado, en audiencia se ratificó in extenso en el contenido de la demanda de acción de amparo constitucional interpuesta.

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas

María René Barrios Vargas, Asambleísta Regional del Gran Chaco - Caraparí, mediante escrito cursante de fs. 114 a 116 vta., señaló que: **a)** El accionante Román

Gómez López, los terceros interesados y sus personas en condición de demandados en la presente acción constitucional, tienen domicilio institucional en Yacuiba, Carapari y Villamontes de la provincia Gran Chaco del departamento de Tarija; por lo que el Tribunal de Sentencia de Entre Ríos, en razón de territorio no tiene competencia para conocer el mismo; y, **b)** Según el art. 32 del Código Procesal Constitucional (CPCo), son dos los criterios para determinar la competencia del Juez: el territorial y grado; en el caso concreto, la vulneración alegada se produjo en Villamontes, por lo que la autoridad judicial competente para resolver la acción planteada, es del mencionado municipio de la provincia Gran Chaco y no el Tribunal de Sentencia Único de Entre Ríos de la provincia O'Connor, por esos hechos descritos, pide que el Tribunal de garantías, decline la competencia al Juez de Partido de Turno de Villamontes, ya que caso contrario estaría cometiendo el delito de prevaricato.

El codemandado, José Guerrero Toribio, Asambleísta Regional de la provincia Gran Chaco, por escrito de fs. 117, manifestó que la elección de la cuestionada Directiva de la Asamblea Regional, no fue realizada conforme determina el Reglamento Interno de Debates, por cuanto la única Directiva legal y legítimamente presidida es la de Román Gómez López, razón por la cual, al haber restaurado derechos y garantías, pide se deniegue tutela respecto a su persona.

A su vez, Juan Antonio García Cardozo y Guimer Beizaga Solares, Asambleístas Regionales de la provincia Gran Chaco del Departamento de Tarija, no remitieron informe alguno y menos se hicieron presentes en la audiencia señalada.

I.2.3. Intervención de terceros interesados

Roxana Ferreira Carema, Mario Jonatan Aldana Albis, Julio César Ferreira Campos y Carlos Rodríguez Cardozo, todos Asambleístas Regionales de la provincia Gran Chaco; y Cristina Montalvo Vargas, representante del Banco Unión S.A. de Tarija, a pesar de su legal notificación, no presentaron ningún informe y tampoco se hicieron presentes en la audiencia señalada.

I.2.4. Resolución

El Tribunal de Sentencia de Entre Ríos del departamento de Tarija, mediante Resolución 06/2015 de 21 de julio, cursante de fs. 343 vta. a 354, **concedió** la tutela, disponiendo se restituya al accionante al cargo de Presidente de la Asamblea Regional del Chaco Tarijeño, así como la nulidad de todos los actos, la habilitación de firmas y todas las Resoluciones posteriores emitidas por los demandados, fundando su Resolución en los siguientes puntos **1)** Respecto a la supuesta falta de competencia del Tribunal de Sentencia de Entre Ríos, para resolver la demanda constitucional, cabe referir que según el art. 6 del Reglamento Interno de Funcionamiento y Debates de la Asamblea Regional del Chaco, la sede de la citada Asamblea es de carácter rotatorio, entre los municipios de Villa Montes, Yacuiba y Caraparí y si bien el acto lesivo denunciado se produjo en el último Municipio,

conforme el art. 32 del CPCo, el juzgado o tribunal competente, para conocer la acción planteada es del lugar donde se haya causado la violación del derecho; máxime si el accionante cuenta con domicilio en Caraparí; sin embargo, de acuerdo al mapeo judicial de Tarija, se constató que Caraparí, tiene un Juzgado Mixto de Instrucción y no un Juzgado de Partido Mixto, por lo que de acuerdo a la norma, la parte demandante se halla facultado para presentar la acción constitucional, considerando la cercanía territorial y condiciones de transporte, razón por la cual, el Tribunal de garantías de Entre Ríos es competente; **2)** Los Asambleístas demandados, al formular la declinatoria de competencia y presentar el escrito de 21 de julio de 2015, solicitando fotocopias legalizadas, aceptaron de forma tácita la competencia del Tribunal de garantías de Entre Ríos, más aun si en sujeción al ejercicio de su derecho a la defensa, concurrieron a la audiencia de acción tutelar; **3)** Con relación a la falta de subsidiariedad para interponer la demanda constitucional, es menester referir que en el caso de autos, no es exigible el agotamiento de las vías ordinarias específicas, toda vez que la problemática planteada se halla fundada además en la negación de la participación de la asambleísta representante del PIOC Tapiete en la Sesión de la Asamblea Regional del Gran Chaco, asambleísta que conjuntamente con los representantes de los PIOC de Weenhayek y Guaraní forman parte de la mencionada región, que por sus características étnicas se encuentran o pertenecen a grupos vulnerables, por lo que la acción planteada no se halla dentro de la previsibilidad de la excepción de subsidiariedad; **4)** Según acta de 3 de junio de 2015, los Asambleístas Regionales demandados, decidieron continuar con la sesión que fue suspendida, evitando la presencia de sus otros similares, quienes minutos antes se retiraron del hemiciclo, en razón a esa suspensión, no solo lesionaron el derecho a participar libremente en la formación, ejercicio y control político que establecen los arts. 26 de la CPE y 25 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, que consagra entre otras cosas, el derecho de todo ciudadano a votar y ser elegido; **5)** Los arts. 1, 4, 7 y 9 del Reglamento Interno de Funcionamiento y Debate de la Asamblea Regional del Chaco, establecen las premisas, bases legales, funciones y atribuciones de los asambleístas, luego de la mencionada suspensión, correspondía al presidente Ad Hoc, reinstalar y presidir la sesión ordinaria o extraordinaria y no al secretario, por lo que se vulneró los preceptos aludidos; y, **6)** De acuerdo a la Resolución Regional G-1 01/2015 de 17 de junio, se designó como presidente al accionante, Román Gómez López; Roxana Ferreira Carema, como Vicepresidente; y, Juan Antonio Cardozo Rodríguez, como Secretario, directiva que conforme al reglamento es la única que tiene validez y legalidad.

II. CONCLUSIONES

Del análisis y compulsas de los antecedentes que cursan en obrados, se establecen las siguientes conclusiones:

II.1. Mediante Acta de 2 de junio de 2015, de sesión ordinaria, el Comité Ad Hoc de la Asamblea Regional del Chaco Tarijeño, conformado por los asambleístas Mario Jonatan Aldana Alba, Presidente y Juan Antonio García

Cardozo, Secretario; a fin de contar con la verificación de todos los credenciales y poder emitir un informe al respecto, plantearon un cuarto intermedio hasta el 3 del igual mes y año (fs. 14 a 17).

- II.2.** Según Informe de Revisión de Credenciales de 3 de junio de 2015, emitido por el Presidente y el Secretario del Comité Ad Hoc de la Asamblea Regional del Chaco, puesto en conocimiento del Pleno de la mencionada Asamblea se concluyó que todos los asambleístas tienen sus credenciales sin observaciones, haciendo constar por nota de 2 de junio de 2015, que José Luís Ferreira Corema, hizo conocer la habilitación de Roxana Vanesa Ferreira Carema, como asambleísta Regional del Chaco (fs. 2 a 3).
- II.3.** Instalada la Sesión de 3 de junio de 2015, el mencionado Comité Ad Hoc, al establecer posiciones encontradas y negativa expresada por el demandado Juan Antonio García Cardozo y otros, respecto a la participación de la asambleísta Roxana Vanesa Ferreira Carema, representante del PIOC Tapiete, en la citada sesión, el presidente del Comité, dispuso suspender la misma, para hacer las consultas correspondientes (fs. 16 a 17).
- II.4.** Conforme al Informe Complementario de 12 de junio de 2015, el Presidente Ad Hoc de la Asamblea Regional del Chaco Tarijeño, concluyó que Roxana Vanesa Ferrerira Carema, Asambleísta Regional, con C.I. 10705179 Tja., representante del PIOC Tapiete, se encuentra habilitada para participar en todas las sesiones de la indicada Asamblea (fs. 4 a 6).
- II.5.** Por Resolución Regional G-1 01/2015 de 17 de junio, la Asamblea Regional del Chaco Tarijeño, en la reunión llevada a cabo en Caraparí, resolvió homologar la posesión de la Mesa Directiva para la Gestión 2015-2020, conformada por: Román Gómez López, Presidente; Roxana Ferreira Carema, Vicepresidenta y Carlos Rodríguez Cardozo, Secretario (fs. 10 a 13).
- II.6.** El 19 de junio de 2015, el TDE de Tarija, en aplicación de la Constitución Política del Estado y la Ley del Régimen Electoral, Reglamento de Elección, Remoción, Revocación de Asambleístas y Concejales del PIOC Tapiete, dispusieron otorgar credencial de Asambleísta Regional Titular, a Roxana Vanesa Ferreira Carema (fs. 64).
- II.7.** Del Acta de audiencia de acción de amparo constitucional de 21 de julio de 2015, se tiene que evidentemente el 3 de junio de 2015, los asambleístas ahora demandados, instalaron una sesión y procedieron a elegir a María René Barrios Vargas, Presidente; José Guerrero Toribio, Vicepresidente; y, Guimer Beizaga Solares, Secretario; como integrantes de la nueva Directiva de la Asamblea Regional del Chaco. Acaecimiento que se infiere del informe oral de los nombrados demandados, expuesto a través de su abogado patrocinante (fs. 341 a 342).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante a través de su abogado apoderado, alega la vulneración del derecho a la soberanía, al ejercicio de la autonomía, a ejercer la función pública y a ejercer la facultad administrativa, manifestando que los Asambleístas Regionales -demandados- luego de instalada la Sesión de 3 de junio de 2015, incitados por silbidos y abucheos de terceras personas, no aceptaron que la asambleísta regional del Gran Chaco representante del PIOC Tapiete, sea habilitada en suplencia de su titular y en consecuencia se opusieron a que la misma participe en dicha sesión, por lo que la Directiva Ad Hoc, en aplicación al Reglamento Interno de Funcionamiento y Debate de la Asamblea Regional del Chaco, dispusieron suspender la misma; sin embargo, los demandados, de manera temeraria, aguardando que los otros asambleístas se retiren del hemiciclo, sin contar con el quorum respectivo y contrariando el referido reglamento, instalaron la sesión suspendida y procedieron a conformar una ilegal Pseudo Directiva y a fin de disponer ilegalmente fondos del Estado Boliviano, solicitaron la habilitación de firmas ante el Banco Unión S.A.

En consecuencia, corresponde en revisión verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Naturaleza jurídica de la acción de amparo constitucional

La acción de amparo constitucional prevista por el art. 128 de la CPE, es instituida como una acción tutelar de defensa "...contra actos u omisiones ilegales o indebidas de los servidores públicos, o de persona individual o colectiva, que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la Constitución y la ley".

En cuanto a su viabilidad, el art. 129.I y II de la CPE, precisa que esta acción tutelar se interpondrá: "...siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados", conocido como el carácter subsidiario de la acción tutelar en análisis. La segunda de sus características es la inmediatez, establecida en la citada norma constitucional que determina que esta acción: "...podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o de notificada la última decisión administrativa o judicial".

De los preceptos constitucionales precedentes, concluimos que la acción de amparo constitucional, es una acción de defensa de todas las garantías y derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política del Estado y en los pactos y tratados sobre derechos humanos ratificados por el Estado conforme se infiere de la previsión contenida en el art. 410 de la CPE, exceptuando los derechos a la libertad y a la vida, que están tutelados por la acción de libertad; los tutelados por la acción de privacidad como son los derechos a la intimidad, privacidad personal o familiar, a la imagen, honra y

reputación cuando se impida de alguna forma, conocer, objetar u obtener la eliminación o rectificación de estos datos registrados en un archivo o banco de datos públicos o privados; así como los derechos colectivos que por su naturaleza están tutelados por la acción popular.

III.2. El derecho al ejercicio y control del poder político, a la organización con fines de participación política y al ejercicio de la función pública

La SCP 0567/2012 de 20 de julio, estableció que: *"La Asamblea Constituyente, dio lugar a un nuevo texto constitucional de contenido eminentemente inclusivo y participativo, impronta institucional que necesariamente debe plasmarse en la nueva arquitectura del Estado Plurinacional de Bolivia, cuyo eje medular es la "plurinacionalidad como hecho fundante básico del Estado", cobrando vida a partir de los valores superiores y principios dirigidos a alcanzar el Vivir Bien. La Constitución Política del Estado, efectivamente es la manifestación plena de la voluntad popular, donde se reconocen los derechos entendidos como fundamentales.*

La participación de la sociedad civil en los asuntos de Estado, se encuentra íntimamente ligada a la esencia de la democracia, su concurso no únicamente es un derecho, es una necesidad comunitaria de acceso y control del poder político, cuyo ejercicio en el nuevo orden constitucional es diverso.

La concurrencia de mecanismos de participación ciudadana en el ejercicio del poder y en los asuntos públicos, tienden a acercar el Estado al pueblo, anteriormente visto como un ente abstracto e intangible, compartiendo de ésta manera el ejercicio mismo del poder, buscando en definitiva la satisfacción de las demandas sociales, procurando el mantenimiento de la estabilidad y paz social, extremo únicamente viable si existen altos niveles de participación popular, hecho que impulsó a que el naciente orden constitucional, promueva el desarrollo de una democracia más participativa, con una mayor intervención de los actores sociales y comunales. 'El derecho a la participación en los asuntos públicos es aquel derecho fundamental que supone la exigencia de participación del pueblo en la gestión y resolución de los asuntos públicos, ya sea en forma directa o a través de representantes libremente elegidos. Es un derecho que es manifestación directa del poder soberano del pueblo. Es un derecho que es manifestación soberana del pueblo'.

El derecho de participación política, se encuentra dentro de los Derechos Políticos consagrados en el Título II, Capítulo Tercero, Sección II, art. 26.I de la CPE, disponiendo que:

'Todas las ciudadanas y los ciudadanos tienen derecho a participar libremente en la formación, ejercicio y control del poder político, directamente o por intermedio de sus representantes, sea de manera individual o colectiva. La participación será equitativa y en igualdad de condiciones entre hombres y mujeres'.

Por su parte, el derecho a ejercer la función pública, se encuentra íntimamente ligado al derecho a la ciudadanía, consagrado en el art. 144 de la CPE, derecho que tiene doble dimensión, por cuanto por un lado consiste en el derecho de concurrir como elector o como elegible y por otro, es el derecho al ejercicio de funciones en los órganos de la administración pública, salvo las excepciones establecidas por ley, sin más requisitos que los contenidos en el art. 234 de la Norma Suprema.

La Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica, en su art. 23.1, ha señalado:

'Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades:

a) de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos;

b) de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores, y

c) de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país'''.

III.2.1. Jurisprudencia respecto al ejercicio y control político y la función pública

La antes citada Sentencia Constitucional Plurinacional, señaló que: "La SC 0657/2007-R de 31 de julio, determinó que: '*...derecho del recurrente a ejercer el cargo para el que fue electo consagrado en el art. 40.2 de la CPE, que dispone que la ciudadanía consiste «En el derecho a ejercer funciones públicas, sin otro requisito que la idoneidad, salvo las excepciones establecidas por Ley»*, mandato que consagra la prerrogativa que tiene todo ciudadano, de poder ser elegido o designado para el ejercicio de funciones públicas, previo cumplimiento de los requisitos y condiciones que califiquen su idoneidad, o de los procedimientos democráticos electivos para el caso de servidores públicos electos; y que también implica, una vez que se ejerce el cargo, el derecho a ejercer materialmente ese cargo, no sólo como derecho constitucional, sino como una

realidad fáctica que satisfaga las necesidades económicas y laborales del ciudadano electo.

Además, la protección a dicho derecho implica que la persona esté en posibilidad de cumplir una labor en condiciones dignas y justas. Por lo tanto, el impedir desempeñarse a una persona en el cargo para el cual ha sido electa o designada, o el alterarle de cualquier manera el correcto desarrollo de sus funciones, afectan gravemente su derecho a ejercer esa función pública, y también el derecho al trabajo; ya que éste consiste en: «...la potestad y facultad que tiene toda persona a encontrar y mantener una ocupación que le permita asegurar su propia subsistencia y la de aquellos colocados bajo su dependencia económica, en sí es la facultad que tiene la persona para desarrollar cualquier actividad física o intelectual tendiente a generar su sustento diario, así como el de su familia»'.

En lo que respecta al ejercicio de la función pública, el Tribunal Constitucional en la SC 0980/2010-R de 17 de agosto, señaló que: 'El derecho a ejercer una función pública se encuentra íntimamente ligado al derecho a la ciudadanía, que estaba previsto en el art. 40 de la CPEabrg y que ahora en la Constitución vigente se encuentra en el art. 144, normas en las que se establecen los dos elementos constitutivos de la ciudadanía: en primer lugar consiste en el derecho de concurrir como elector o como elegible a la formación y el segundo es el derecho al ejercicio de funciones en los órganos del poder público; y como consecuencia de ello se establece el derecho de ejercer las funciones públicas sin otro requisito que la idoneidad, salvo las excepciones establecidas por ley'.

III.3. El derecho al trabajo y su configuración constitucional

"A decir de Drzewicki: 'El derecho al trabajo y los derechos en el trabajo constituyen un núcleo, no sólo de los derechos socioeconómicos, sino también de los derechos humanos fundamentales. Un denominador central de derechos relacionados con el trabajo, en términos de su objeto o contenido, parece ser 'una labor' (trabajo). En su tradicional por estrecho sentido, el trabajo ha sido percibido como un medio de ganarse la vida, o en otras palabras, sólo un medio de supervivencia económica. A principios del siglo XX, otra perspectiva más importante y global empezó a ser discutida: la interdependencia entre las condiciones laborales, la justicia social y la paz universal. Adicionalmente las percepciones modernas han intensificado positivamente el concepto del trabajo como valor humano, una necesidad social y un medio de auto-realización y desarrollo de la personalidad humana'.

El art. 46 de la CPE, consagra:

'I. Toda persona tiene derecho: 1. Al trabajo digno, con seguridad industrial, higiene y salud ocupacional, sin discriminación, y con remuneración o salario justo, equitativo y satisfactorio, que le asegure para sí y su familia una existencia digna. 2. A una fuente laboral estable, en condiciones equitativas y satisfactorias.

II. El Estado protegerá el ejercicio del trabajo en todas sus formas.

III. Se prohíbe toda forma de trabajo forzoso u otro modo análogo de explotación que obligue a una persona a realizar labores sin su consentimiento y justa retribución'.

El art. 23.1 de la Declaración de Derechos Universal Humanos (DUDH), en cuanto al derecho al trabajo, dispone:

'Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo'.

A su vez, el art. 14 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, establece que:

'Toda persona tiene derecho al trabajo en condiciones dignas y a seguir libremente su vocación, en cuanto lo permitan las oportunidades existentes de empleo'". Razonamiento que fue asumido por la SCP 0567/2012.

III.4. Posición jurisprudencial del Tribunal Constitucional Plurinacional en relación con el derecho a la igualdad

La SCP 1616/2012 de 1 de octubre, señaló que: "Respecto al derecho a la igualdad, mucho se ha escrito y en esa medida también se ha evolucionado hacia su respeto y consagración.

En ese sentido, el Tribunal Constitucional Plurinacional, entre su abundante jurisprudencia, en la SCP 0080/2012 de 16 de abril, en relación con el derecho-principio- valor de la igualdad, ha señalado: 'El preámbulo de la Constitución Política del Estado promulgada el 7 de febrero de 2009, señala: «...construimos un nuevo Estado. Un Estado basado en el respeto e igualdad entre todos... ».

La arquitectura jurídica e institucional de un Estado de Derecho, se fundamenta en los valores elegidos como sociedad, tales como la igualdad y la no discriminación entre otros. La comunidad entiende que necesita proteger, reforzar y profundizar los valores, mismos que evolucionan permanentemente a la par de la mutación permanente de las circunstancias

y retos, con los cuales el ser colectivo se va enfrentando. La igualdad, por tanto es un valor guía y eje del todo colectivo, que se halla reconocido en el art. 8.II de la CPE, cuando señala: 'El Estado se sustenta en los valores de unidad, igualdad...'.

La Constitución Política del Estado considera a la igualdad, no únicamente como un valor supremo, sino también como un principio motor de todo el aparato jurídico, siempre en procura del logro de un régimen de igualdad real, donde no se reconozcan privilegios y se erradique toda forma de discriminación, consolidando los rasgos e impronta de nuestro nuevo modelo de Estado. Carlos Bernal Pulido al referirse a la igualdad como un principio ha señalado: 'este principio impone al Estado el deber de tratar a los individuos de tal modo que las cargas y las ventajas sociales se distribuyan equitativamente entre ellos (...) como derecho la igualdad atribuye al individuo (el sujeto activo) el derecho de exigir del Estado o de los particulares (el sujeto pasivo) el cumplimiento de los mandatos que se derivan del principio de igualdad'. 'El principio de igualdad (...), en su doble vertiente de igualdad de trato y de no discriminación, se proyecta, como ya tuvimos oportunidad de decir, sobre todos los poderes públicos, operando por ello mismo en dos planos distintos: igualdad en la ley e igualdad en la aplicación de la ley (...)'.

La igualdad, además de ser un valor y un principio, es también un derecho y una garantía. Es un derecho que a su vez reivindica el derecho a la diferencia y es una garantía porque avala su ejercicio activando la tutela judicial y constitucional en caso de su violación.

'Igualdad, como Garantía individual es un elemento consubstancial al sujeto en su situación de persona humana frente a sus semejantes todos...es una situación en que está colocado todo hombre desde que nace'.

La Declaración de los Derechos Universales del Hombre proclama que: 'Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros'.

Así también, el art. 26 del Pacto sobre los Derechos Civiles y Políticos de 1966, en cuanto al derecho a la igualdad expresó: 'Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a igual protección de la ley. A este respecto, la ley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social'.

Por su parte, la Convención Americana de Derechos Humanos, en su art. 24, determina: 'Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley'.

III.5. Marco legal interno de la Asamblea Regional del Chaco Tarijeño. Reglamento Interno de Funcionamiento y Debate

Con carácter previo a ingresar al análisis del caso específico, brevemente se desarrolla la normativa relacionada con la problemática específica.

"El Reglamento Interno de Funcionamiento y Debate, de la Asamblea Regional del Chaco Tarijeño, establece lo siguiente:

Art. 5

Principios.-

La Asamblea Regional del Chaco Tarijeño en el ejercicio de sus funciones se regirá por los siguientes principios:

Igualdad.-

La relación entre asambleístas regionales debe ser armónica, con trato igualitario y reciprocidad entre ellos (as), no admite subordinación jerárquica ni tutela entre sí'.

(...)

Representación de las Naciones y Pueblos Indígenas Originarios Weenhayek, Tapiete y Guaraní de la Región.-

La participación de las tres Naciones y Pueblos Indígenas Originarios de la Región del Chaco Tarijeño, se la ejercerá a través de sus representantes elegidos de acuerdo a sus normas, usos y costumbres, garantizándose la representación de los mismos al interior de la Asamblea Regional del Chaco Tarijeño.

(...)

Art. 6

Sede y Lugar de Sesiones.-

La Sede de la Asamblea Regional del Chaco Tarijeño, será de carácter rotatorio en los tres Municipios de Yacuiba, Caraparí y Villa Montes y los pueblos indígenas originarios que conforman la Región Autónoma, donde sesionará en forma Ordinaria y Extraordinaria.

(...)

Art. 11.
Asambleístas Regionales Suplentes.-

Los asambleístas Regionales suplentes, debidamente acreditados por la Corte Departamental Electoral, reemplazaran a sus titulares con los mismos derechos y obligaciones en los siguientes casos.

(...).

Art. 12.
Reemplazo.

Sobre el reemplazo de los Asambleístas Regionales Titulares:

I. En los casos previstos por el artículo anterior, el Presidente de la Asamblea Regional convocara mediante notas a los asambleístas suplentes y los habilitara con las formalidades que corresponden, a fin de asumir el reemplazo del titular conforme a lo previsto por el artículo 15 del presente reglamento.

II. Para la solicitud de licencia, el Asambleísta Regional titular mediante nota deberá dar a conocer el tiempo de ausencia, las razones y la debida justificación al Presidente de la Asamblea Regional.

(...)

Art. 16.
Pleno de la Asamblea Regional del Chaco Tarijeño.-

Es la máxima instancia de decisión de la Asamblea Regional del Chaco Tarijeño, está conformado por total de nueve Asambleístas Regionales en ejercicio o por el número de Asambleístas Regionales que constituyen el quórum en cada sesión ordinaria o extraordinaria.

En esta instancia se delibera, se aprueban y fiscalizan los recursos asignados a la Región Autónoma del Chaco Tarijeño, administrados por los Ejecutivos Seccionales de Desarrollo de la Región, aprobando la firma de contratos y convenios institucionales, así como planes, programas y proyectos con cargo a estos recursos. La actividad del Pleno de la Asamblea Regional del Chaco Tarijeño se desarrolla en sesiones ordinarias, extraordinarias y audiencias públicas.

(...)

Art. 18.

La Directiva.-

- I. La Directiva de la Asamblea Regional del Chaco Tarijeño, es la instancia de Dirección de la Asamblea Regional del Chaco Tarijeño y representa las decisiones del mismo ante los tres Ejecutivos Seccionales de Desarrollo y demás instituciones públicas y privadas.
- II. Está conformada por un Presidente (a), un Vicepresidente (a) y un Secretario (a), que serán elegidos entre sus miembros titulares por mayoría simple de los representantes, el Presidente (a) y el Secretario (a), corresponderán a la mayoría y el Vicepresidente (a) a la minoría. En caso de no existir quórum en la Directiva para la instalación de la Sesión, estará sujeto a la siguiente disposición:
 - 1.- Ante la inasistencia del Vicepresidente (a) y del Secretario (a), El Presidente (a), designará un Secretario a.i. de entre los Asambleístas presentes;
 - 2.- Ante la inasistencia del Vicepresidente (a) y del Secretario (a), asumirá el cargo del Presidente (a) a.i. y designará un Secretario (a) a.i. de entre los asambleístas presentes.
- III. La elección se realizará en la Primera Sesión de cada gestión y durarán en sus funciones por el periodo de una gestión anual”.

III.6. Análisis en el caso concreto

Ingresando al análisis de los hechos motivo de la acción tutelar, el accionante mediante su representante, manifestó que los cuatro asambleístas demandados, María René Barrios Vargas, Guimer Beizaga Solares, Juan Antonio García Cardozo y José Guerrero Toribio, luego de oponerse en sesión preparatoria de 3 de junio de 2015, que Roxana Vanesa Ferreira Carema, Asambleísta suplente representante del PIOC Tapiete, sea habilitada y participe en la misma, sin considerar que dicha sesión fue suspendida y aguardando que sus similares se retiren del hemicycle, de manera arbitraria, temeraria y contradictorio al Reglamento Interno de Funcionamiento y Debate de la Asamblea Regional del Chaco Tarijeño, instalaron ilegalmente la mencionada sesión preparatoria y procedieron a elegir y conformar una pseudodirectiva y posteriormente a mediados de junio del indicado año, con la finalidad de disponer ilegalmente fondos del

Estado Boliviano, solicitaron la habilitación de firmas ante el Banco Unión S.A.

De la revisión de antecedentes, se constata que efectivamente: El 25 de mayo de 2015, el TDE de Tarija, en aplicación de la Ley del Órgano Electoral Plurinacional y la Sección III entrega de Credenciales de la Ley del Régimen Electoral y conforme a los resultados obtenidos en la Elección de Autoridades Políticas Departamentales, Regionales y Municipales efectuada el 29 de marzo del indicado año, dispuso otorgar el credencial de Asambleísta Regional PIOC Tapiete, suplente, a Roxana Vanesa Ferreira Carema. Por Informe de Revisión de Credenciales de 3 de junio de 2015, la Directiva Ad Hoc, puso a conocimiento del Pleno de la Asamblea Regional del Chaco Tarijeño, que José Luís Ferreira Corema, Asambleísta Titular, manifestó que en su lugar se proceda a habilitar a la nombrada asambleísta suplente, originando el Informe de 12 de junio de 2015, por el que se concluyó que Roxana Vanesa Ferreira Corema, se encuentra habilitada para participar en todas las sesiones de la Asamblea, por lo que mediante Resolución RSP-TED/TJA 82/2015 de 12 de junio, el TDE de Tarija, dispuso otorgar credencial de Asambleísta Regional Titular a la mencionada representante del PIOC.

El art. 30 de la CPE, establece que:

- I. Es nación y pueblo indígena originario campesino toda la colectividad humana que comparta identidad cultural, idioma, tradición histórica, instituciones, territorialidad y cosmovisión, cuya existencia es anterior a la invasión colonial española.
- II. En el marco de la unidad del Estado y de acuerdo con esta Constitución las naciones y pueblos indígena originario campesinos gozan de los siguientes derechos:
 1. A existir libremente.
 2. A su identidad cultural, creencia religiosa, espiritualidades, prácticas y costumbres, y a su propia cosmovisión.
 3. A que la identidad cultural de cada uno de sus miembros, si así lo desea, se inscriba junto a la ciudadanía boliviana en su cédula de identidad, pasaporte u otros documentos de identificación con validez legal.
 4. A la libre determinación y territorialidad.
 5. A que sus instituciones sean parte de la estructura general del Estado.
 6. A la titulación colectiva de tierras y territorios.
 7. A la protección de sus lugares sagrados.

8. A crear y administrar sistemas, medios y redes de comunicación propios.
 9. A que sus saberes y conocimientos tradicionales, su medicina tradicional, sus idiomas, sus rituales y sus símbolos y vestimentas sean valorados, respetados y promocionados.
 10. A vivir en un medio ambiente sano, con manejo y aprovechamiento adecuado de los ecosistemas.
 11. A la propiedad intelectual colectiva de sus saberes, ciencias y conocimientos, así como a su valoración, uso, promoción y desarrollo.
 12. A una educación intracultural, intercultural y plurilingüe en todo el sistema educativo.
 13. Al sistema de salud universal y gratuito que respete su cosmovisión y prácticas tradicionales.
 14. Al ejercicio de sus sistemas políticos, jurídicos y económicos acorde a su cosmovisión.
 15. A ser consultados mediante procedimientos apropiados, y en particular a través de sus instituciones, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles. En este marco, se respetará y garantizará el derecho a la consulta previa obligatoria, realizada por el Estado, de buena fe y concertada, respecto a la explotación de los recursos naturales no renovables en el territorio que habitan.
 16. A la participación en los beneficios de la explotación de los recursos naturales en sus territorios.
 17. A la gestión territorial indígena autónoma, y al uso y aprovechamiento exclusivo de los recursos naturales renovables existentes en su territorio sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por terceros.
 18. A la participación en los órganos e instituciones del Estado.
- III. El Estado garantiza, respeta y protege los derechos de las naciones y pueblos indígena originario campesinos consagrados en esta Constitución y la ley”.

El Reglamento interno de funcionamiento y debate de la Asamblea Regional del Chaco Tarijeño, en su contenido normativo, de los arts. 5.- (Principios), en concordancia con el citado y 30 de la CPE, se infiere que: Representación de la Naciones y Pueblos Indígenas Originarios Campesinos (NPIOC) Weenhayek, Tapiete y Guaraní de la Región. La participación de las tres NPIOC de la Región del Chaco Tarijeño, se la ejercerá a través de sus representantes elegidos de acuerdo a sus normas, usos y costumbres, garantizándose la representación de los mismos al interior de la Asamblea

Regional del Chaco Tarijeño; a su vez el art. 11. (Asambleístas Regionales Suplentes).- prevé el procedimiento, para que los Asambleísta Regionales suplentes, acreditados debidamente por el Tribunal Departamental Electoral, reemplacen a su titular con los mismos derechos y obligaciones.

En el caso concreto, el procedimiento de reemplazo, dispuesto para que la asambleísta suplente representante de PIOC Tapiete, Roxana Vanesa Ferreira Carema, sea habilitada como titular, fue realizado no solo en sujeción al aludido art. 30 constitucional, sino también en observancia de los referidos arts. 5 y 11 de dicho Reglamento, por lo que los Asambleístas Regionales demandados, al impedir su habilitación y participación fuera del marco legal, actuaron de manera discrecional y con torpeza, por cuanto pretendieron desconocer no solo la legalidad y aplicación de su propio reglamento, sino el derecho "a la participación en los órganos e instituciones del Estado" que tienen todas las NPIOC, a través de sus respectivos representantes; aspecto por el cual, se lesionó el derecho a la igualdad, al trabajo, al ejercicio y control del poder político y a ejercer la función pública.

Respecto a la elección y conformación de la Directiva Ad Hoc, compuesta por María René Barrios Vargas, Presidente; José Guerrero Toribio, Vicepresidente; y, Guimer Beisaga Solares, Secretario, todos Asambleístas Regionales ahora demandados, se tiene que, si bien la conformación de dicha Directiva, se halla integrada, por una Presidenta, Vicepresidente y Secretario; sin embargo, vulnera el art. 18 del Reglamento Interno de Funcionamiento y Debate, por cuanto la elección de los mismos, se desarrolló omitiendo responder los criterios de participación de la mayoría y de la minoría, para la elección del respectivo cargo de Presidente y Secretario, así como de Vicepresidente; hecho que torna ilegal y arbitraria la elección de la mencionada Directiva, más aún si el propio Asambleísta -demandado- José Guerrero Toribio, por escrito de fs. 117, manifestó que la elección de la cuestionada Directiva de la Asamblea Regional, no fue realizada conforme determina el Reglamento Interno de Debates, precisamente porque la Sesión preparatoria de 3 de junio de 2015, fue reinstalada de manera ilegal, sin conocimiento y participación de todos los Asambleístas Regionales, por lo no se justifica de modo alguno que los asambleístas demandados, respalden su actuar antijurídico, basados en un mero antojo, incitados por desaprobación de personas extrañas y ajenas a la Asamblea Regional del Chaco, lo que en consecuencia originó de manera irresponsable y poco transparente se solicite el trámite de habilitación de firmas ante el Banco Unión S.A., actuación realizada con profundo desprecio a su propio reglamento, razón por la cual, corresponde otorgar la tutela que brinda la acción de amparo constitucional.

Por lo expresado precedentemente, el Tribunal de garantías al haber **concedido** la tutela solicitada, efectuó una adecuada compulsión de los antecedentes procesales de esta acción tutelar interpuesta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 44.1 del Código Procesal Constitucional; en revisión, resuelve: **CONFIRMAR en todo** la Resolución 06/2015 de 21 de julio, cursante de fs. 343 vta. a 354, pronunciada por el Tribunal de Sentencia de Entre Ríos, constituido en Tribunal de garantías; y, en consecuencia, **CONCEDER** la tutela impetrada, en los términos dispuestos por el mencionado Tribunal.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dra. Mirtha Camacho Quiroga
MAGISTRADA

Fdo. Dr. Juan Oswaldo Valencia Alvarado
MAGISTRADO